

José María IGLESIAS ALTUNA, *Procesos matrimoniales canónicos*, Editorial Civitas S.A., Madrid 1991, 500 págs.

1. Tras una dedicatoria entrañable, se abre este libro de «Procesos matrimoniales canónicos» precedido por lo que el A. designa como «Epílogo que se ofrece a modo de PRÓLOGO para aviso de posibles lectores poco cautos».

La cuidada edición que ha hecho Iglesias Altuna de su libro ya se pone en evidencia cuando se fija el lector en la disposición con que estas palabras citadas son situadas en la página. El A. no parece satisfacerse con exponer los contenidos de su trabajo. El libro, desde su comienzo, transpira lo que estéticamente calificamos muchas veces de «buen gusto». Y a un mismo tiempo muestra una clara intención didáctica. Lo presenta, como «una mano tendida, en ofrecimiento de ayuda». ¿A quién o quiénes? ¿a los estudiosos o cultivadores del Derecho procesal canónico? ¿a los abogados y profesionales que trabajan en las Curias diocesanas? No, el A. sabe que ha escrito un libro esencialmente práctico. Toda su *Tercera Parte*, que se inicia en la página 267 hasta la 490, con la que la publicación alcanza su final, si excluimos las últimas páginas dedicadas al *Índice General*, es realmente una colección de formularios que se ofrecen para la práctica judicial; y que podían haber sido editados con independencia de la Primera Parte y de la Segunda -ésta ya estrictamente procesal-, formando un libro aparte. Pero con esto se pone también de relieve la intención didáctica del Autor, pues el libro va dirigido -sin excluir a nadie, confiesa- «a laicos que han recibido su formación jurídica en las Facultades de Derecho de las Universidades estatales». Es decir, unos licenciados en Derecho del Estado, que ejercen la Abogacía, y que en la actualidad cabe pensar que carecen de la suficiente formación eclesiológica y del necesario utillaje intelectual que, para enfocar los problemas matrimoniales que se suscitan y que se han de resolver en los procesos canónicos, resultan necesarios.

El A. no lo dice con esta claridad que aquí nos expresamos, pues grande y admirable es su delicadeza en el decir, que revela no sólo al profesor que enseña, al escritor cultivado que expone, sino sobre todo al humanista, que al aproximarse a la realidad jurídica que trata de explicar, advierte que antes ha de acercarse al hombre, al destinatario de la publicación, ha de ilustrarlo con lo que llama «Presupuestos doctrinales», que ocupan toda la Parte Primera, para ponerlo en antecedentes, para descubrir al lector un bagaje científico y cultural sin el cual no es permitido comprender ni los procesos canónicos, ni el poder jurisdiccional que la Iglesia en ellos ejercita, ni el propio matrimonio canónico, que es la materia -sacramental y jurídica a la vez- que se debate en la médula del acontecer procesal. Este humanismo, reflejado tan felizmente en ese Prólogo (págs. 13-23), es un humanismo cristiano, que se corona con una amplia nómina de personalidades, maestros, compañeros, colaboradores, a los que reconoce y agradece, unas veces su enseñanza, otras su magisterio técnico, otras su amistad, otras su colaboración.

2. Entrando ya en el contenido de la obra la vemos dividida en tres partes, de las que la *Primera* (pp. 29-116), la que -como ya se dijo- designa como «Presupuestos

doctrinales», está a su vez dividida en tres capítulos: el I lo titula «La Iglesia Católica» (págs. 29-76) y es un bello y excelente tratado sintético de eclesiología, apoyado por una doctrina tradicional y muy actual a su vez del Magisterio eclesiástico, a la que no faltan ciertas observaciones, subrayados culturales, manifestaciones del talante intelectual de un autor, ilustrado por un largo periplo de lecturas de clásicos y escritores recientes. Sin embargo, lo que más merece que aquí se destaque es la seria fundamentación doctrinal en que se apoya la enseñanza que expone. Para los que en la Universidad nos movemos, podemos alguna vez encontrarnos con el interrogante de qué sea la Iglesia, tantas veces procedente del joven universitario que, espíritu inquieto, avizora la verdad e intenta poseerla. Aunque sean muchos y buenos los estudios eclesiológicos publicados en los últimos años, un canonista que, además, se dedica al Derecho Procesal, encontrará, desde ahora, fácil y suficiente el poder remitir a este Cap. I de la Parte Primera de la obra de Iglesias Altuna, en la confianza de que allí la pregunta encontrará la respuesta convincente, atractivamente expuesta y en todo conforme con la doctrina católica.

Lo que acaba de decirse puede perfectamente ser trasladado a la exposición que se hace por el A. en el Cap. II sobre «El matrimonio canónico» (pp. 76-98), signo y participación de la unión de Cristo con la Iglesia, y también signo -sacramento- eficaz de la gracia. En fin, en el Cap. III se trata de la «Función Jurisdiccional de la Iglesia» (pp. 99-116), proemio asimismo necesario para introducir con facilidad y comprensión al estudio de los designados por el Autor con el plural «procesos canónicos matrimoniales», rúbrica con que da título a la obra.

3. Toda la *Segunda Parte* -la central del libro- está dedicada, primero, a las «Normas generales del proceso matrimonial» (pp. 119-161), y en segundo lugar a «Los procesos matrimoniales» (pp. 165-267). Se patentiza, de inmediato, a la vista del «Índice General», que bajo la rúbrica «procesos» el A. comprende todo aquello que tradicionalmente por los canonistas y el propio Código vigente, al igual que el anterior, se entiende por procesos, no siempre coincidente con lo que la dogmática procesal moderna califica de tal, por la clara distinción de naturaleza jurídica que diferencia al proceso del procedimiento; éste no siempre al servicio de aquel, sino en muchas hipótesis con propia autonomía, como instrumento jurídico formal suficiente de investigación y alumbramiento de una realidad jurídica, si bien no originada por el ejercicio de la acción procesal, no regida por el principio de contradicción, no desveladora de una realidad o constitutiva de ésta, o vinculando a una condena de dar, hacer o de abstenerse, mediante una decisión judicial, cuya eficacia se caracteriza por su paso a cosa juzgada (a pesar -he de aclarar- del c. 1643).

El Autor, no obstante, aunque se le descubre buen conocedor de la doctrina procesal, ha optado por la línea expositiva de mejor orientación para el lector destinatario de su trabajo, ajustándose a la sistemática del Código, si bien dejando, para el final de esta Parte, lo que se le muestra con características bien diferenciadas de los propiamente llamados procesos matrimoniales; es decir, se trata del Cap. VIII (pp. 235-253) con una exposición detallada de los trámites a seguir para la dispensa del matrimonio rato y no consumado, según las disposiciones del Código y una normativa específica

de la Santa Sede que en su exposición sabe situar adecuadamente. Lo mismo ocurre con lo que designa como proceso para la disolución del vínculo matrimonial en favor de la fe, al que dedica el Cap. IX, y último de esta Segunda Parte (pp. 255-267), de gran utilidad práctica. Quizá lo que designa como proceso sobre la muerte presunta del cónyuge debió desplazarlo también a estos lugares últimos de su exposición, dada su peculiar característica, y sin embargo lo incluye, en el Cap. III (pp. 219-223), después de los procesos de nulidad y antes del de separación de cónyuges.

Refiriéndonos ya estrictamente al apartado I, relativo a normas generales, pienso que su sistemática es muy acertada: Cap. I, sujetos del proceso (pp. 119-145), que comprende el estudio de Organos jurisdiccionales y de partes, y en cuyo contexto incluye lo relativo a los abogados y procuradores; Cap. II, el objeto del proceso (pp. 147-152), en el que incluye la acción, que desde nuestro punto de vista al menos siempre la hemos estimado causa y no objeto; y un Cap. III, sobre la disciplina a observar en los tribunales (pp. 153-161), en la que entran cuestiones varias, no sólo lo que es propiamente de naturaleza disciplinar, sino también lo que se refiere a los plazos procesales, lugar, tipos de resoluciones judiciales, actos de comunicación.

Respecto a los procesos matrimoniales ya en concreto se dedica el Cap. III al ordinario de nulidad de matrimonio (pp. 165-213), el IV al proceso documental (pp. 215-217) y el VII para el de separación de cónyuges (pp. 225-233), si bien distinguiendo el procedimiento administrativo (pp. 225-228) del proceso judicial oral (pp. 228-232) e incluso haciendo unas breves referencias últimas para la separación convencional (pp. 232-233).

4. Hemos anotado siempre el número de páginas porque pensamos que resulta dato indicativo de la atención que el A. muestra a las diversas parcelas en que su trabajo se ordena. Hay un cierto equilibrio incluso en la distribución de las materias expuestas, aunque no deje de notarse una cierta merma de atención para el proceso documental, que, a pesar de no ser el que ocupa más el trabajo de tribunales y abogados, hubiera merecido algún mayor detenimiento en su estudio.

En conjunto, estimo que se ha hecho por el A. un buen trabajo sistemático y de síntesis. Las ideas son expuestas con claridad en una técnica en que los temas centrales se van situando en el texto, mientras matices, aclaraciones continuas y relaciones con otros preceptos quedan por notas a pie de página, con la intención clara de completar y hacer entender con mayor perfección lo que en el texto consta. Alguna opinión o calificación de fenómenos jurídicos, puede que no se compartan, pero sí desde luego todo el conjunto; incluidas aclaraciones y matices, lo aceptamos sin reserva.

5. Por último, el formulario de la Tercera Parte está dividido en cinco apartados, a saber, proceso ordinario de nulidad de matrimonio, el documental, los procedimientos de muerte presunta, el de dispensa del matrimonio rato y no consumado y el de disolución del vínculo en favor de la fe. Es muy completo y su ordenación, siguiendo el orden de las actuaciones, facilita encontrar pronto la fórmula deseada, aparte de que estén indicadas con número y página en el Índice General (pp. 493-500).

Los formularios no suelen agotar los posibles eventos judiciales; sin embargo, este es muy completo. Sólo a título de observación curiosa, y para no resultar

laudatorio en exceso, me atrevo a señalar -puede que me equivoque- que falta alguna fórmula relativa a la prueba que regula el c. 1600. También añadirse, sobre todo, que en escritos de partes, informes periciales, decisiones judiciales, al incluirse textos que contienen juicios y opiniones, sobre materias jurídicas determinadas, se rebasa lo que tradicionalmente se viene exigiendo en los formularios para los diversos modelos de actos procesales. Aquí se nota -en nuestra opinión- esa larga experiencia profesional que el A. confiesa y esa colaboración de jueces eclesiásticos que agradece en la presentación de su Formulario.

Al insertarse en el libro las diversas fórmulas, ocupando la tercera parte aproximadamente de la obra publicada, hace pensar que este libro tiene exclusivamente un interés práctico por esa orientación didáctica, confesada en el prólogo, de dirigirse a laicos, quizás jóvenes profesionales que se inician en el foro judicial. Y ciertamente tal fin lo consigue plenamente, pudiendo también interesar a todo aquel que desarrolle labores en las Curias judiciales eclesiásticas. Sin embargo, la obra que comentamos llega mucho más allá de ese interés práctico por ser, sobre todo, un excelente compendio que puede servir de manual para el estudiante del Derecho procesal canónico, como puede servir asimismo de instrumento de trabajo auxiliar, con el que confrontar muchas cuestiones, para quien se preocupa de este Derecho procesal.

CARMELO DE DIEGO-LORA

ORGANIZACIÓN ECLESIASTICA

G. LO CASTRO, *Las prelaturas personales. Perfiles jurídicos*, 1 vol. de 314 páginas, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., Pamplona, 1991.

El objeto de esta monografía -traducción de la que con el título *Le prelature personali. Profili giuridici* fue editada por Giuffrè en 1988- es descrito con claridad por su autor en la «Advertencia preliminar». Estudia distintos temas en relación con las prelaturas personales: su composición estructural, su naturaleza jurídica, los poderes del prelado, el acuerdo con las iglesias locales y otros muchos; y ello según diversas perspectivas -metodológicas, críticas, dogmático-reconstructivas, problemáticas-, a cada una de las cuales viene dedicado un capítulo (cfr. p. 7).

El enfoque es, en ocasiones -en abundantes ocasiones-, crítico; con una crítica, a mi juicio, bien planteada y mejor resuelta, de opiniones que, según subraya el autor, le «han parecido infundadas e inaceptables» (p. 8) y, precisamente por ello, ha recibido «los estímulos (...), sin los cuales probablemente no me hubiese decidido -dice- a acometer este estudio o a desarrollarlo como lo he hecho» (ibid.).

Desde mi punto de vista, lo que se deduce desde el principio -y así queda subrayado